

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El anteproyecto remitido incorpora una modificación puntual de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego que pretende un triple objetivo:

- El refuerzo de las funciones de la autoridad de regulación del juego en la protección de determinados colectivos de participantes en consonancia con las previsiones introducidas por el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego.
- La mejora y racionalización del ejercicio de los derechos ARCO de los participantes en los juegos frente a los operadores, de modo que el ejercicio de estos derechos haya de realizarse siempre ante el operador de juego
- El fomento de la colaboración con otras autoridades en la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas, incluyendo una disposición adicional en la que se hace referencia al Servicio de Investigación global del Mercado de Apuestas como instrumento técnico en el que diversos actores interesados en la erradicación del fenómeno de la manipulación deportiva y amaños en los mercados de apuestas comparten información dirigida a este fin.

I

En lo que a la materia de protección de datos personales respecta, la norma a la que debe ajustarse el anteproyecto es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), plenamente aplicable desde el 25 de mayo de 2018, así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Respecto de la primera cuestión que se plantea, relativa a la asignación a la autoridad de regulación del juego de una nueva competencia relativa a la protección a los grupos de jugadores en riesgo, evaluando la eficacia de las medidas sobre juego responsable o más seguro desarrolladas por los operadores, la misma debe ponerse en relación con lo previsto en el artículo 8.1. de la Ley 13/2011, que dispone que “los operadores de juego deberán elaborar un plan de medidas en relación con la mitigación de los posibles efectos perjudiciales que pueda producir el juego sobre las personas e incorporarán las reglas básicas de política del juego responsable”, incluyéndose en su apartado a) como uno de sus objetivos, por lo que se refiere a la protección de los consumidores, “prestar la debida atención a los grupos en riesgo”.

Como ya señalara esta Agencia en sus informes 316/2017 y 12/2020, al informar el proyecto del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego:

Quiere ello decir que los tratamientos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el precepto que acaba de reproducirse y que deberán llevar a cabo los operadores de juego se encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 c) del Reglamento general de Protección de Datos, que establece que será lícito el tratamiento de datos de carácter personal “es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”.

A estos efectos, esta Agencia puso de manifiesto la necesidad de evitar que dichos tratamientos pudieran utilizarse con finalidades distintas, lo que dio lugar a que se añadiera un último párrafo al apartado 1 del artículo 34 del siguiente tenor:

«El tratamiento de los datos personales de las personas jugadoras que resulte de aplicar los mecanismos y protocolos previstos

en este apartado solo tendrá por finalidad la detección de personas que incurran en un comportamiento de riesgo y la puesta en marcha de las medidas contenidas en este artículo».

Con la modificación introducida, se pretende ampliar las competencias de la Dirección General de Ordenación del Juego de modo que pueda evaluar la eficacia de las medidas que, en cumplimiento de dicha obligación legal, han de adoptar los operadores de juego, supuesto en el que, si fuera necesario tratar datos de carácter personal, la modificación propuesta los legitimaría conforme al artículo 6.1.e) del RGPD (el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento), cumpliendo de este modo con la previsión del artículo 8.2. de la LOPDGDD al tratarse de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

II

La segunda cuestión que se plantea es la referida al ejercicio de los derechos que la normativa sobre protección de datos personales atribuye a los afectados, en relación con los datos personales objeto de tratamiento en la Unidad Central de Juegos.

En primer lugar, debe ponerse de manifiesto la existencia de una contradicción entre la Exposición de motivos, que se refiere al ejercicio por los participantes «de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», mientras que en el texto propuesto del nuevo apartado 5 que se añadiría al artículo 18 de la Ley 13/2011 se limita a «los derechos de acceso y rectificación», por lo que lo primero que debería aclararse es esta discrepancia, al objeto de determinar si es un error o, por el contrario, sería un supuesto de exclusión de los restantes derechos, debiendo tener en cuenta que el RGPD atribuye, además, nuevos derechos a los afectados, como el derecho a la limitación del tratamiento (artículo 18) o a la portabilidad (artículo 20), además de haber modificado la denominación del derecho de cancelación, que pasa a denominarse derecho de supresión (artículo 17).

En principio, los participantes en los juegos son titulares de todos los derechos que les reconoce la normativa sobre protección de datos personales, por lo que si lo que se pretende es limitar alguno de estos derechos, dicha

limitación deberá responder a los requisitos establecidos en el artículo 23 del RGPD, lo que debería justificarse adecuadamente en la memoria, señalando las importantes razones de interés público que lo legitiman y evaluando su necesidad y proporcionalidad. Asimismo, se debería dar cumplimiento en el articulado a las previsiones del apartado 2 del citado artículo 23. Por lo tanto, el texto remitido no cumple con los requisitos necesarios para limitar derechos en este apartado.

Por el contrario, si se trata de una mera omisión, debería aclararse el precepto haciendo referencia a todos los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD.

Sin perjuicio de lo anterior, la cuestión que procede analizar es ante quién se deben ejercitar los derechos en relación con los tratamientos de datos personales que se realicen en la Unidad Central de Juegos, partiendo del hecho de que dichos derechos se reconocen frente al responsable del tratamiento.

A este respecto, la necesidad de contar con una Unidad Central de Juegos es una obligación que la Ley impone a los operadores de juego, conforme al artículo 18:

Artículo 18. Unidad Central de Juegos.

1. Los operadores habilitados para la organización, explotación y desarrollo de los juegos de carácter permanente objeto de esta Ley, deberán disponer de una Unidad Central de Juegos que cumplirá las especificaciones que, a dicho efecto, establezca la Comisión Nacional del Juego, y que permitirá:

a) Registrar todas las actuaciones u operaciones realizadas desde los equipos y usuarios conectados a la misma.

b) Garantizar el correcto funcionamiento de las actividades de juego.

c) Comprobar en todo momento, si así fuera necesario, las operaciones realizadas, los participantes en las mismas y sus resultados, si la naturaleza del juego así lo permite, así como reconstruir de manera fiable todas las actuaciones u operaciones realizadas a través de ella.

2. Los operadores deberán asegurar la existencia de las copias de seguridad necesarias y la aplicación de las medidas técnicas y los planes de contingencia que permitan garantizar la recuperación de datos ante cualquier clase de incidencia.

3. Los operadores deberán disponer de una réplica de su Unidad Central de Juegos, que permitirá el normal desarrollo de la actividad de los juegos, con todas las garantías, en los supuestos en que la Unidad Principal se hallare fuera de servicio.

4. Tanto la Unidad Central de Juegos como su réplica, incorporarán conexiones informáticas seguras y compatibles con los sistemas de la Comisión Nacional del Juego, que permitan a ésta realizar un control y seguimiento, en tiempo real si así se requiriera, de la actividad de juego llevada a cabo, de los premios otorgados y de la identidad de las personas que participan y son premiadas en los mismos, y en su caso, de la devolución de premios que eventualmente se produzca con motivo de la anulación de los juegos, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de realizar inspecciones presenciales. La Unidad Central deberá poder ser monitorizada desde territorio español por la Comisión Nacional del Juego, con independencia de su ubicación. La Comisión Nacional del Juego podrá requerir que unidades secundarias de los sistemas del operador se ubiquen en España con la finalidad de verificación y control de la información.

Todo ello, sin perjuicio de las competencias que, en relación con la misma, se reconocen a la DGOJ en el artículo 21:

5. Establecer los requisitos técnicos y funcionales necesarios de los juegos, los estándares de operaciones tecnológicas y certificaciones de calidad, y los procesos, procedimientos, planes de recuperación de desastres, planes de continuidad del negocio y seguridad de la información, de acuerdo con las previsiones contenidas en los reglamentos correspondientes y los criterios fijados por el Consejo de Políticas del Juego.

6. Homologar el software y los sistemas técnicos, informáticos o telemáticos precisos para la realización de los juegos, así como los estándares de los mismos, incluyendo los mecanismos o sistemas que permitan la identificación de los participantes en los juegos. En el

ejercicio de esta función, la Comisión Nacional del Juego velará por evitar cualquier obstáculo injustificado a la competencia en el mercado.

Dichas normas se desarrollan por el Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, regulación del juego, en lo relativo a los requisitos técnicos de las actividades de juego, cuyo artículo 2. apartados 1 y 2 define la Unidad Central de Juego del siguiente modo:

1. Sistema técnico de juego. Se entiende por sistema técnico de juego el conjunto de equipos, sistemas, terminales, instrumentos y material software empleado por el operador para la organización, explotación y desarrollo de la actividad de juego. El sistema técnico de juego soporta todas las operaciones necesarias para la organización, explotación y desarrollo de la actividad de juego, así como la detección y el registro de las transacciones correspondientes entre los jugadores y el operador.

Los elementos básicos del sistema técnico de juego son la Unidad Central de Juegos y el sistema de control interno.

2.Unidad Central de Juegos. Se entiende por Unidad Central de Juegos el conjunto de elementos técnicos necesarios para procesar y gestionar las operaciones realizadas por los participantes en los juegos.

Forman parte de la Unidad Central de Juegos, la plataforma de juegos y el software de los juegos.

Asimismo, en el apartado 6 se refiere al registro de acceso:

6. Registro de acceso. El registro de acceso es el sistema que almacena y conserva las operaciones realizadas sobre la Unidad Central de Juegos por operarios, administradores y demás personas vinculadas al operador o, en su caso, a la Comisión Nacional del Juego, con acceso a aquélla.

Por consiguiente, nos encontramos en un supuesto en que la determinación de los fines y los medios del tratamiento, que es lo que caracteriza al responsable del tratamiento, se han establecido directamente por

el legislador, lo que en relación con la normativa de protección de datos implica que los tratamientos se realizan al amparo de lo previsto en las letras 6.1.c) y e) del RGPD, siendo la propia norma la que, al amparo de lo previsto en los apartados 2 y 3 del citado artículo 6, introduce especificaciones respecto al tratamiento de datos personales, delimitando los fines y medios del tratamiento y asignándoselo a los operadores de juego que, de este modo, tendrán la consideración de responsable respecto de los tratamientos de datos personales necesarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.7) del RGPD *in fine*: “si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembro”.

En este sentido, las Directrices 07/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre los conceptos de responsable del tratamiento y encargado en el RGPD, diferencian dos supuestos. Por un lado, los supuestos en los que el poder de decisión puede inferirse de una competencia legal explícita, por ejemplo, cuando el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nominación son designados por la legislación nacional o de la Unión. Cuando el responsable del tratamiento haya sido identificado específicamente por ley, esto será determinante para establecer quién actúa como responsable. Esto presupone que el legislador ha designado como responsable a la entidad que tiene una capacidad genuina para ejercer el control. Y que en algunos países, legislación nacional establece que las autoridades públicas son responsables del tratamiento de datos personales dentro del contexto de sus funciones (apartado 21). Y por otro, el supuesto más común en que, en lugar de nombrar directamente al responsable del tratamiento o establecer los criterios para su designación, la ley establece una tarea o impone un deber a alguien para captar y tratar ciertos datos. En esos casos, el fin del tratamiento a menudo está determinado por la ley y el responsable del tratamiento será normalmente el designado por ley para la realización de esta finalidad, como sería el caso cuando una entidad a la que se le confían determinadas tareas públicas (por ejemplo, seguridad social) que no puede cumplirse sin recopilar al menos algunos datos personales, establece una base de datos o registro para cumplir con esas tareas públicas. En ese caso, la ley, aunque indirectamente, establece quién es el responsable. De manera más general, la ley también puede imponer una obligación tanto a entidades públicas como privadas para retener o proporcionar ciertos datos. Estas entidades entonces normalmente se considerarían como responsables

con respecto al tratamiento que es necesario para ejecutar esta obligación (apartado 22).

Por consiguiente, de la regulación del juego anteriormente citada, el establecimiento de una Unidad Central de Juegos es una obligación que la ley impone a los operadores para el ejercicio de su actividad. Por lo que, sin perjuicio que la misma se configure, asimismo, como el mecanismo para la monitorización por parte de la autoridad competente y el correcto ejercicio de sus funciones de inspección y control, el responsable del tratamiento de los datos personales en la citada Unidad es el operador de juego correspondiente, siendo ante éste frente al cual se podrán ejercer los derechos por parte de los afectados.

III

Por último, procede el análisis de la disposición adicional novena que se introduce en la Ley 13/2011, relativa al Servicio de Investigación global del mercado de apuestas, configurado, según la MAIN, como el instrumento técnico en el que diversos actores interesados en la erradicación del fenómeno de la manipulación deportiva y amaños en los mercados de apuestas comparten información dirigida a este fin.

Este servicio se justifica sobre la base de distintas competencias que la Ley 13/2011 atribuye a la autoridad de juego, y en el ejercicio de las cuales se ha puesto de manifiesto como uno de los fenómenos más preocupantes el de la «corrupción vinculada a la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas deportivas, que afectan al normal desarrollo de las actividades relacionadas con el juego y menoscaban los intereses de sus participantes, constituyendo, a su vez, una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atentan contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores»

Asimismo, se destaca en su justificación que se trata de un diagnóstico es compartido a nivel internacional, tal y como se recoge en la Comunicación de la Comisión Europea de 23 de octubre de 2012, titulada “Hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea”, en la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre el amañado de partidos y la

corrupción en el deporte, o en el Convenio del Consejo de Europa sobre la Manipulación de las Competiciones Deportivas o Convenio de Macolin, aún no ratificado por España, y que tiene por finalidad combatir la manipulación de las competiciones deportivas para la protección de la integridad del deporte y la ética deportiva de conformidad con el principio de autonomía del deporte.

Igualmente, en el ámbito interno, se cita la creación, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Hacienda, Interior y Cultura y Deporte y mediante Orden PCI/759/2019, de 9 de julio, de la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas, órgano colegiado que, dependiente del Ministerio de Consumo, se constituye en el cauce formalizado de diálogo y cooperación entre autoridades públicas, organizaciones deportivas, organizadores de competiciones deportivas y representantes del sector del juego con experiencia en la materia al objeto de prevenir y erradicar la corrupción y la manipulación de las competiciones y las apuestas.

Partiendo de lo anterior, el anteproyecto regula el órgano responsable de la gestión del Servicio, su finalidad, su configuración telemática, los partícipes en el mismo, los datos objeto de tratamiento, el plazo de conservación y la limitación de los derechos de los afectados respecto del tratamiento de sus datos personales, en los siguientes términos:

“Disposición adicional novena. Servicio de investigación global del mercado de apuestas.

1. El Servicio de investigación global del mercado de apuestas, gestionado por la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, que tendrá la consideración de responsable del tratamiento de datos de carácter personal que puedan realizarse, tiene por finalidad la prevención y lucha contra el fraude en el mercado de apuestas deportivas y la manipulación en competiciones de este tipo, por medio del oportuno intercambio de información entre sus participantes.

El servicio se configura como una red de cooperación interactiva y accesible por vía telemática en cuya composición participan aquellos actores que, teniendo un interés objetivo en la erradicación de este tipo de prácticas, determine la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal mediante el oportuno instrumento jurídico, y en el que se podrán tratar datos sobre la identidad de las personas respecto a las que existan indicios de haber incurrido en algún tipo de

comportamiento o práctica fraudulenta relacionada con una apuesta irregular o sospechosa en uno o varios eventos deportivos, así como los datos de las personas participantes en el sistema.

En los términos previstos en el artículo 9 del Reglamento (UE)2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en su apartado 2, queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona.

2. A los tratamientos de datos de carácter personal del Servicio de investigación global del mercado de apuestas, cuya conservación no podrá ser superior a un año, no les será de aplicación el deber de información del artículo 14 del Reglamento general de protección de datos y 11.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Asimismo, tampoco serán de aplicación a los tratamientos citados los preceptos contenidos en la normativa de protección de datos referidos al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. En caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, la autoridad competente para la regulación del juego se limitará a ponerle de manifiesto lo dispuesto en este artículo.”

A este respecto, lo primero que debe señalarse es que esta Agencia ha participado en diversas reuniones con la Dirección General de Ordenación del Juego con el objeto de conocer mejor el funcionamiento del Sistema y emitió el informe 165/2018, en el que se analizaba la incidencia de la normativa sobre protección de datos personales en dicho Sistema. No obstante, con posterioridad a la emisión de dicho informe se han producido otros hechos relevantes, destacando la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo o la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Partiendo de lo anterior, esta Agencia valora positivamente la inclusión de la citada disposición adicional, de modo que los tratamientos de datos personales por el Sistema se encuentren regulados en una norma con rango de Ley, en la que, conforme a la doctrina recogida en la STC 76/2019, deberán recogerse las garantías oportunas, siendo el criterio de esta Agencia la necesidad de realizar previamente, con intervención del Delegado de Protección de Datos, un análisis de los riesgos del tratamiento y, en su caso, una Evaluación de impacto en la protección de datos, que permita identificar adecuadamente cuáles son dichas garantías. Los resultados de dichos análisis deberían incorporarse en la MAIN, en la que, asimismo, debería desarrollarse con mayor precisión el fundamento y el funcionamiento del Sistema.

A este respecto, interesa destacar la existencia de limitaciones a los derechos de los afectados, cuyo carácter excepcional requiere siempre de una interpretación restrictiva, y para cuya justificación, conforme recuerdan las Directrices 10/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos, sobre restricciones con arreglo al artículo 23 del RGPD (adoptadas el 13 de octubre de 2021), debe realizarse una evaluación de su necesidad y proporcionalidad, debiendo ser los motivos de la restricción claros, por lo que debe desarrollarse más en la MAIN dicha justificación, vinculada a la necesidad de no perjudicar la investigación de los posibles supuestos de fraude.

Asimismo, en la correspondiente disposición adicional deberían identificarse los principales aspectos relacionados con el tratamiento de datos personales, recogiendo las garantías oportunas. Sin perjuicio de que las mismas deban ajustarse al resultado del análisis de riesgos y, en su caso, de la Evaluación de impacto, se adelantan las siguientes:

- i) Finalidad del tratamiento: según consta en el apartado 1, es «la prevención y lucha contra el fraude en el mercado de apuestas deportivas y la manipulación en competiciones de este tipo, por medio del oportuno intercambio de información entre sus participantes».
- ii) Roles que corresponden a los participantes en el sistema: Conforme al apartado 1, la gestión del sistema corresponde a la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, siendo, de este modo, dicha autoridad la que ostenta la condición de responsable del tratamiento, tal y como se recoge en el último texto remitido.

Por otro lado, se prevé que participen en el Sistema «aquellos actores que, teniendo un interés objetivo en la erradicación de este tipo de prácticas, determine la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal mediante el oportuno instrumento jurídico». A este respecto, y sin perjuicio de lo que se indicará posteriormente respecto de la identificación de estos actores, debe determinarse el rol que asumen en función de si solo tratan los datos por

cuenta del responsable, en cuyo caso se trataría de encargados del tratamiento, o de si participan en la determinación de los fines o medios o está previsto que traten los datos para el ejercicio de sus competencias propias relacionadas con la finalidad del tratamiento, en cuyo caso serían responsables. En el caso de tratarse de encargados del tratamiento, lo que sería a los exclusivos efectos de los datos personales y los tratamientos que se realizan en el Sistema de Alertas y de acuerdo con las instrucciones marcadas por la DGOJ, el oportuno instrumento jurídico que se suscriba, que deberá tener carácter vinculante, deberá cumplirse con las previsiones del artículo 28 del RGPD, incluyendo, en todo caso, el contenido señalado en su apartado 3.

Asimismo, si en el Sistema participan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conforme a la previsión expresa de colaboración en las funciones de vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego prevista en el artículo 24.1 de la Ley 3/2011, y lo hacen en su condición de policía judicial, una vez comunicados los datos personales a estas autoridades, en la medida en que se utilicen con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, su tratamiento quedará sujeto a la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

iii) Base legitimadora: Tal y como se señalaba en el Informe 165/2018, el tratamiento de los datos personales encontraría su fundamento en lo previsto en la letra 6.1.e) del RGPD:

Partiendo de lo anterior, y tal y como se explica en la detallada y debidamente motivada consulta remitida, el Sistema de Alertas tiene por finalidad proteger a los participantes en el mercado de las apuestas de ciertas prácticas que, por alterar los resultados de un evento deportivo de manera fraudulenta, acaban por distorsionar gravemente su participación en el juego, las apuestas realizadas sobre un evento amañado lamentablemente ya no dependen del azar, como exige la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Asimismo, el Sistema tiene por finalidad vigilar y controlar el segmento de las apuestas deportivas, con vistas a garantizar el orden público y proteger el mercado de juego regulado, por cuanto que el modelo de negocio de los operadores de juego de ámbito estatal con título habilitante queda alterado gravemente cuando se produce un amaño deportivo que violenta de manera incontestable el entorno predictivo diseñado por aquéllos.

Dicha finalidad encontraría su amparo en las competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego atribuye a la

Dirección General de Ordenación del Juego tras la asunción por ésta del objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011 atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego (disposición adicional décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

En este sentido, el artículo 21 de la Ley 13/2011 señala, entre las funciones de la DGOJ, las siguientes:

- a) Vigilar, controlar, inspeccionar y, en su caso, sancionar las actividades relacionadas con los juegos (...). (apartado 7).
- b) Asegurar que los intereses de los participantes y de los grupos vulnerables sean protegidos, así como el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y principios que los regulan, para defender el orden público y evitar el juego no autorizado” (apartado 9).
- c) Colaborar en el cumplimiento de la legislación de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y vigilar el cumplimiento de la misma, sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos en relación con los operadores que realicen actividades de juego sujetas a reserva de actividad por la Ley” (apartado 14).

Junto a dichas funciones, el artículo 24.1 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, determina que a la Dirección General de Ordenación del Juego “Le corresponde la auditoría, vigilancia, inspección y control de todos los aspectos y estándares administrativos, económicos, procedimentales, técnicos, informáticos, telemáticos y de documentación, relativos al desarrollo de las actividades previstas en esta Ley.”

Por otro lado, destaca la consulta cómo *“conectada directamente con la función del artículo 21.7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, (“Vigilar, controlar, inspeccionar y, en su caso, sancionar las actividades relacionadas con los juegos...”)*, se encuentra todo el régimen sancionador del Título VI que atribuye competencias directas en este ámbito a la Dirección General de Ordenación del Juego. Interesa resaltar en este ámbito que en el elenco de conductas susceptibles de constituir infracción administrativa a los efectos de la Ley y, consecuentemente, poder dar lugar al inicio de un expediente sancionador, se encuentran las contenidas en los tipos infractores previstos en los artículos 41.a) y b), que pasan a relatarse a continuación:

- En primer lugar, la letra a) del artículo 41 establece que constituyen infracciones leves “a) La participación en actividades de juego, contraviniendo las prohibiciones establecidas en el artículo 6.2, letras c), d), e), f), g) y h), de esta Ley.): estas prohibiciones son las “prohibiciones subjetivas” asociadas a la práctica de juego, y las mismas tienen una conexión directa con el mundo del deporte. En este sentido, la ley prohíbe expresamente que formen parte de un entorno de juego los siguientes colectivos de personas:

“d) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

e) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

f) Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos.”

La finalidad última de estas prohibiciones subjetivas es garantizar la limpieza de las apuestas, y la ratio que subyace es la de evitar la participación de quienes, debido a su actividad, se encuentran en una situación de privilegio respecto al resto de participantes en las apuestas, además de poder influir en el resultado.

Pues bien, desde esta perspectiva el Sistema de Alertas en materia de apuestas deportivas se constituye en un instrumento necesario para el ejercicio de esta potestad sancionadora legalmente atribuida y por ende a la misión atribuida a la Dirección General de Ordenación del Juego.

- En segundo lugar, la letra b) del artículo 41 establece que constituyen infracciones leves “b) Los incumplimientos de las obligaciones contenidas en esta Ley, cuando no estuvieren expresamente tipificadas como infracciones graves o muy graves.”.

Entre estas obligaciones ex lege es sumamente importante la relativa al deber general de cualquier participante en el juego de “no alterar el normal desarrollo de los juegos”, que queda expresamente recogido en el artículo 15.2.c) de la Ley 13/2011. No cabe duda que la posible práctica de un amaño deportivo, con vistas a obtener réditos a través de la formulación de apuestas viciadas desde su inicio, constituye un claro ejemplo de una alteración del normal desarrollo de los juegos, sobre la que la eficacia de la competencia sancionadora de la DGOJ debe quedar absolutamente garantizada.

Desde esta perspectiva, y al igual que en el epígrafe anterior, el Sistema de Alertas diseñadas se constituye en un instrumento esencial y necesario para el ejercicio de la señalada competencia y, por ende, contribuye al cumplimiento de la misión atribuida a la DGOJ”.

Esta Agencia comparte la conclusión alcanzada y debidamente fundamentada por la DGOJ, en el sentido de que el Sistema de Alertas es un instrumento necesario para el ejercicio de las competencias que la Ley 13/2011 atribuye a la dicha Dirección General, especialmente las funciones de inspección y control que desarrolla el artículo 24 de la Ley 13/2011 anteriormente citado, y que entre otra cuestiones se refiere a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al seguimiento y control de los operadores y de las cuentas de usuario o al deber de colaboración de los operadores habilitados, sus representantes legales y su personal y que por su importancia se transcribe a continuación:

“Artículo 24. Inspección y Control.

1. Al objeto de garantizar lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones que la complementen, corresponderá a la Comisión Nacional del Juego la auditoría, vigilancia, inspección y control de todos los aspectos y estándares administrativos, económicos, procedimentales, técnicos, informáticos, telemáticos y de documentación, relativos al desarrollo de las actividades previstas en esta Ley.

Asimismo, corresponderá a la Comisión Nacional del Juego la investigación y persecución de los juegos ilegales, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los términos del artículo 45.4 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La Comisión Nacional del Juego establecerá los procedimientos necesarios en orden al cumplimiento de las funciones antes citadas.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.1.A), letra d), de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, colaborarán con la Comisión Nacional del Juego en las funciones de vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. Si como resultado de la actividad inspectora llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de las funciones de colaboración con la Comisión Nacional del Juego se comprobara la existencia de indicios de la comisión de una infracción, se levantará la oportuna acta que será enviada a los órganos competentes para iniciar el procedimiento sancionador.

2. Por la Comisión Nacional del Juego se establecerán los procedimientos adicionales para el seguimiento y control de los operadores que realicen actividades de juego sujetas a reserva en virtud de una ley y del cumplimiento de las condiciones que se establezcan a los mismos, en especial, en relación con la protección del orden público y la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En el supuesto de que, en el ejercicio de su labor inspectora, la

Comisión Nacional del Juego apreciara posibles infracciones de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, informará a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los términos del artículo 48.1 de la citada Ley.

3. La Comisión Nacional del Juego podrá efectuar un control sobre la cuenta de usuario del participante en las actividades de juego objeto de esta Ley, así como de los operadores o proveedores de servicios de juego. La Comisión Nacional del Juego tendrá acceso a los datos de carácter personal recogidos en la cuenta de usuario de los participantes, respetando en todo momento lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y su normativa de desarrollo.

Las Administraciones Públicas darán acceso a la Comisión Nacional del Juego a sus bases de datos con la finalidad de comprobar la identidad del participante y, especialmente, su condición de mayor de edad.

4. Los operadores habilitados, sus representantes legales y el personal que en su caso se encuentre al frente de las actividades en el momento de la inspección, tendrán la obligación de facilitar a los inspectores y a su personal auxiliar el acceso a los locales y a sus diversas dependencias, así como el examen de los soportes técnicos e informáticos, libros, registros y documentos que solicite la inspección. El resultado de la inspección se hará constar en acta que tendrá la naturaleza de documento público y hará prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos y circunstancias que la motiven.

El acta deberá ser firmada por el funcionario que la extienda y por la persona o representante de la entidad fiscalizada, quien podrá hacer constar cuantas observaciones estime convenientes. Se entregará copia del acta a la persona o representante de la entidad fiscalizada, dejando constancia, en su caso, de su negativa a firmarla o a estar presente en el desarrollo de la inspección.

En el ejercicio de las funciones de inspección el personal de la Comisión Nacional del Juego tendrá la condición de autoridad. El ejercicio de las facultades de inspección y control podrá ser objeto de convenio con las Comunidades Autónomas respecto de las actividades y de los medios o instrumentos situados en su territorio, con excepción de las de carácter resolutorio.

La Comisión Nacional del Juego colaborará con otros organismos reguladores del Espacio Económico Europeo en la persecución del juego ilegal, mediante la adopción de medidas coordinadas para obtener la cesación en la prestación de servicios ilegales de juego y el intercambio de información.

5. La Comisión Nacional del Juego podrá firmar acuerdos de correulación que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en particular en lo referido a la publicidad, en los términos que se determinen reglamentariamente. En la medida en

que dichos acuerdos afecten a la publicidad efectuada por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberá recabarse informe del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con carácter previo a la firma de los mismos. Los sistemas de autorregulación se dotarán de órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas. Sus códigos de conducta podrán incluir, entre otras, medidas individuales o colectivas de autocontrol previo de los contenidos publicitarios y deberán establecer sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión Europea, de conformidad con lo previsto en la Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000 relativo a la red comunitaria de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier disposición equivalente”.

Por todo ello debe concluirse que el Sistema de Alertas, en cuanto al tratamiento de datos personales que puedan realizarse, encuentra su fundamento en lo previsto en el artículo 6.1 letra e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Habiendo sido atribuida dicha competencia por una norma con rango de ley conforme a lo exigido por el artículo 8.2 de la LOPDPGDD.

Este criterio resulta reforzado tras la última modificación de la Ley 13/2011 por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. Dicha modificación pretende, entre otros objetivos, «habilitar mecanismos adecuados para colaborar en la prevención y la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas» y a cuyos efectos se introducen diversas modificaciones, destacando la atribución a la DGOJ de la competencia para «Combatir el fraude en el entorno de las actividades del juego, incluyendo el fraude en las apuestas deportivas, y colaborar con las autoridades competentes en la prevención y la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas» (apartado 15 del artículo 21).

iv) Principios de exactitud, minimización de datos y limitación del plazo de conservación: Deben adoptarse las garantías oportunas para que los datos tratados sean sólo los adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»), así como para que sean exactos, adoptando todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean

inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud») y para que sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales («limitación del plazo de conservación»).

En relación con el principio de minimización, deberían identificarse los datos estrictamente necesarios que habrán de tratarse en el Sistema para el cumplimiento de las finalidades previstas en la ley. Asimismo, dada su finalidad, deben adoptarse las garantías oportunas de modo que no se traten categorías especiales de datos, en cuanto que su tratamiento no es necesario para la finalidad perseguida, debiendo recogerse expresamente esta exclusión en el texto de la ley y en los instrumentos que se suscriban.

A este respecto, el último texto remitido especifica, en relación con los datos que se podrán tratar, que «se podrán tratar datos sobre la identidad de las personas respecto a las que existan indicios de haber incurrido en algún tipo de comportamiento o práctica fraudulenta relacionada con una apuesta irregular o sospechosa en uno o varios eventos deportivos, así como los datos de las personas participantes en el sistema». No obstante, debería precisarse aún más el tipo de datos que se tratarán.

En cuanto al tratamiento de categorías especiales de datos, se ha introducido en el texto la siguiente precisión:

«En los términos previstos en el artículo 9 del Reglamento (UE)2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en su apartado 2, queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona».

No obstante, no se justifica en la MAIN la necesidad de tratar categorías especiales de datos personales atendiendo a la finalidad pretendida, por lo que si fuera necesario debería justificarse dicha necesidad e identificar los tipos de datos a los que se refiere. Por otro lado, atendiendo a los supuestos que permiten levantar la prohibición del artículo 9 y que se contemplan en su apartado 2, únicamente podrían tratarse aquellos que el afectado hubiera hecho manifiestamente públicos, ya que no concurre ninguno de los demás previstos, teniendo en cuenta que se trata de tratamientos que se realizan sin el consentimiento del afectado (e, incluso, sin su conocimiento, tal y como se analizará posteriormente). Y, teniendo en cuenta la finalidad pública

perseguida, el tratamiento de datos necesarios para la misma no debería depender de que el propio afectado los hubiera hecho públicos. Y, en este sentido, es de destacar que no puede apreciarse la concurrencia de la causa previstas en la letra g): «el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado». La concurrencia de esta causa requiere, según reiterada doctrina de esta Agencia, una norma con rango de ley, que justifique el carácter esencial del interés público perseguido, que sea proporcional y que establezca las garantías adecuadas atendiendo a la categoría de datos tratados, circunstancias que no concurren en el texto remitido. Por lo tanto, únicamente podrían tratarse si, previo el oportuno análisis de riesgos y la preceptiva Evaluación de Impacto que sería necesaria por el tratamiento masivo de categorías especiales de datos y atendiendo al resultado de los mismos, se modificara, si dicho resultado lo permite, tanto la MAIN como el texto en el sentido señalado, justificando la idoneidad, necesidad y proporcionalidad del tratamiento de estos datos e identificando garantías específicas. En otro caso, debe modificarse el texto para recoger que, en ningún caso, se tratarán por el Sistema categorías especiales de datos.

Respecto de los principios de exactitud y limitación del plazo de conservación, deberán adoptarse las cautelas para evitar que se introduzcan datos que carecen manifiestamente de fundamento, así como para suprimir inmediatamente aquellos datos tratados por el Sistema que no se corresponden con una actividad irregular (principio de exactitud de los datos), salvo que concurren otras circunstancias (por ejemplo, conductas que aisladamente no son irregulares pero que es su reiteración en un determinado espacio temporal las que ponen de manifiesto su irregularidad) en cuyo caso deberá establecerse un plazo para su conservación que no exceda de lo estrictamente necesario y que deberá fijarse por la DGOJ atendiendo a las circunstancias concurrentes y a su experiencia en relación con las actividades fraudulentas. Asimismo, en el caso de que como consecuencia del tratamiento en el Sistema se incoara un procedimiento de investigación por la policía judicial o un procedimiento administrativo sancionador por la DGOJ, deberán incorporarse los datos al procedimiento correspondiente y suprimirse del Sistema, quedando sujetos los tratamientos de datos personales a su normativa específica.

Por último, en cuanto al plazo de conservación, el último texto incluye la previsión expresa de que su «conservación no podrá ser superior a un año». No obstante, ese plazo del año debe considerarse como máximo, lo que debe ponerse en relación con la circunstancia de que pueda tratarse de actividades meramente sospechosas que antes de dicho plazo se haya puesto de manifiesto que no son actividades irregulares. Por ello, debería recogerse expresamente la previsión de que no se conservarán más allá del tiempo que

sea necesario para verificar la irregularidad de la conducta, suprimiéndose en el momento en que se ponga de manifiesto que no es una actividad sospechosa, sin que en ningún caso puedan conservarse por un periodo superior a un año.

vi) Acceso a los datos. A este respecto, como ya se adelantaba, deberían identificarse quienes son los demás actores que pueden tener acceso a los datos personales tratados en el sistema, limitado exclusivamente a aquellos cuyas competencias o ámbito de actuación esté directamente relacionado con la finalidad del tratamiento. Del mismo modo, deberían adoptarse todas las cautelas necesarias para evitar que puedan tener un acceso excesivo a los datos que son objeto de tratamiento. Asimismo, debería delimitarse en el texto de la disposición los datos personales a los que podrán tener acceso los distintos actores que acceden al Sistema, limitado a los que hayan podido aportar y, en su caso, aquellos otros que sean necesarios para cumplir con la finalidad del tratamiento y estén directamente relacionados con el ámbito en el que desarrollan su actividad o ejercen sus competencias. Por último, debería recogerse expresamente un deber de confidencialidad para todas aquellas personas que accedan a los datos personales del Sistema, así como garantizar la trazabilidad de los accesos.

vii) Integridad y confidencialidad. Previo análisis de los riesgos conforme al artículo 24 del RGPD y, en su caso, previa Evaluación de impacto en la protección de datos, deberán aplicarse las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad de los datos personales adecuado al riesgo, que incluirán, entre otros factores “la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento” y “la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico” (artículo 32.2. b) y c) del RGPD).

Asimismo, debería clarificarse que las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos previsto en el artículo 24.1 del RGPD, en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad deberían prevalecer sobre éstas últimas, a fin de dar adecuado cumplimiento a lo exigido por el Reglamento General de Protección de Datos.

viii) Deber de información. El texto remitido incluye una previsión específica respecto de la exención del deber de información previsto en el artículo 14 del RGPD, cuando los datos no se obtienen directamente del afectado:

«A los tratamientos de datos de carácter personal del Servicio de investigación global del mercado de apuestas no les será de aplicación el deber de información del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 11.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales»

A este respecto, conviene recordar que, dentro de las excepciones previstas en el propio artículo 14, apartado 5 del RGPD, se incluye en su letra c) el supuesto de que «la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, o Derechos de los afectados».

Por consiguiente, el deber de informar conforme al artículo 14 no es aplicable en la medida en que la obtención de los datos o su comunicación al Sistema está prevista en una norma con rango de ley, siempre que, además, recoja las garantías adecuadas, en los términos que se vienen indicando a lo largo del presente informe. Además, esta exención debe ponerse en relación con el principio de publicidad de las normas, tal y como se analiza en nuestro Informe 37/2021, que permite dar a conocer la existencia de los tratamientos de datos personales.

Por otro lado, en el supuesto de que se contemple la comunicación de los datos personales a la policía judicial u otra autoridad competente a los fines contemplados en la Ley Orgánica 7/2021, resultaría de aplicación la previsión de su artículo 7.4:

4. En los supuestos contemplados en los apartados anteriores, el interesado no será informado de la transmisión de sus datos a las autoridades competentes, ni de haber facilitado el acceso a los mismos por dichas autoridades de cualquier otra forma, a fin de garantizar la actividad investigadora.

Con el mismo propósito, los sujetos a los que el ordenamiento jurídico imponga un deber específico de colaboración con las autoridades competentes para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 1, no informarán al interesado de la transmisión de sus datos a dichas autoridades, ni de haber facilitado el acceso a los mismos por dichas autoridades de cualquier otra forma, en cumplimiento de sus obligaciones específicas.

No obstante, si como consecuencia del tratamiento de los datos personales en el Sistema, se incoara un procedimiento administrativo o penal, deberá cumplirse con el deber de información en los términos previstos en su normativa específica, lo que debería recogerse en el Anteproyecto.

ix) Derechos de los afectados. El texto remitido excluye el ejercicio de los derechos de los afectados en los siguientes términos:

«Asimismo, tampoco serán de aplicación a los tratamientos citados los preceptos contenidos en la normativa de protección de datos referidos al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. En caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, la

autoridad competente para la regulación del juego se limitará a ponerle de manifiesto lo dispuesto en este artículo».

A este respecto, el RGPD admite, excepcionalmente y en los supuestos tasados en el artículo 23, que pueda procederse a su limitación por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, lo que requerirá en el caso de norma nacional que tenga rango de ley y que cumpla con los requisitos del apartado 2 del citado artículo 23:

2.En particular, cualquier medida legislativa indicada en el apartado 1 contendrá como mínimo, en su caso, disposiciones específicas relativas a:

- a) la finalidad del tratamiento o de las categorías de tratamiento;
- b) las categorías de datos personales de que se trate;
- c) el alcance de las limitaciones establecidas;
- d) las garantías para evitar accesos o transferencias ilícitos o abusivos;
- e) la determinación del responsable o de categorías de responsables;
- f) los plazos de conservación y las garantías aplicables habida cuenta de la naturaleza alcance y objetivos del tratamiento o las categorías de tratamiento;
- g) los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, y
- h) el derecho de los interesados a ser informados sobre la limitación, salvo si puede ser perjudicial a los fines de esta.

En el presente caso, se trata de una norma con rango de ley, cuyo fundamento se encontraría en las previsiones de las letras d, e y h del artículo 23.1 del RGPD:

- d) la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención;
- e) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social;
- h) una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos contemplados en las letras a) a e) y g);

Además, a lo largo del presente informe, se vienen indicando las garantías que deben recogerse en la ley y que se corresponden con las

previsiones del apartado 2 del artículo 23, por lo que en este apartado, además de la información sobre la existencia de la limitación a la que hace referencia el texto mediante la puesta de manifiesto de lo dispuesto en la disposición adicional, debería incluirse *el alcance de las limitaciones establecidas*.

De este modo, no procede decir que no son de aplicación los derechos, sino que debería determinarse en qué forma se produce su limitación (exclusión total, o un aplazamiento, limitación u omisión parcial). Y deduciéndose del texto remitido que lo que se pretende es una exclusión total, debería especificarse que la misma lo será únicamente respecto del tratamiento de los datos personales en el Sistema, que debe limitarse al tiempo imprescindible para que no se vea perjudicada la investigación, y al igual que se ha indicado para el deber de información, advirtiendo de que si como consecuencia del tratamiento de los datos personales en el Sistema, se incoara un procedimiento administrativo o penal, podrán ejercerse los derechos en los términos previstos en su normativa específica.

Asimismo, deberían incluirse garantías adicionales a las ya señaladas, como puede ser, en su caso, el deber de informar al afectado sobre su solicitud en el plazo de un mes, conforme al artículo 12.3 del RGPD o el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con el artículo 77 del RGPD.